Mandatos del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

REFERENCIA:
AL MEX 3/2018

26 de marzo de 2018

Excelencia:

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y de Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de conformidad con las resoluciones 33/30, 34/18, 33/9 y 34/5 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la apertura de procesos penales y la emisión de órdenes de aprehensión por el delito de motín en contra de la Sra. **María de Jesús Espinoza de los Santos** y el Sr. **Víctor Hugo Zavaleta Ruiz**, y de dos otros trabajadores del sector salud del estado de Chiapas y defensores de los derechos laborales. Las imputaciones se relacionarían con dos huelgas de hambre organizadas en abril y mayo del 2017 por personal hospitalario para protestar por las irregularidades en la administración de las instituciones de salud de la entidad y pedir el reinstalamiento del personal hospitalario en sus puestos.

Según la información recibida:

En los meses de abril y mayo del 2017, la Sra. Espinoza de los Santos y el Sr. Zavaleta Ruiz, junto con más trabajadores del sector salud del estado de Chiapas, sostuvieron dos huelgas de hambre de aproximadamente 20 días para exigir mejoras en las condiciones laborales del personal hospitalario y protestar contra el desabasto de medicamentos en los hospitales estatales y la corrupción en las instituciones de salud chiapanecas.

Las huelgas habrían terminado con la firma de un acuerdo con el Gobierno estatal en el cual éste se comprometió a reinstalar al personal médico/hospitalario en sus puestos, a garantizar el abasto permanente de medicamentos y materiales necesarios a los hospitales, y al pago de prestaciones laborales atrasadas al personal hospitalario. Asimismo, el Gobierno estatal se habría comprometido a no emprender represalias laborales, administrativas o penales en contra de las personas que participaron en la huelga de hambre.

El 29 de diciembre de 2017, un juez local habría emitido órdenes de aprehensión en contra de la Sra. Espinoza de los Santos, el Sr. Zavaleta Ruiz y de más personal hospitalario, después de que el Secretario de Salud de Chiapas los

denunciara por el delito de motín, presuntamente en relación con las huelgas de hambre de abril y mayo del 2017.

Los procesos penales y órdenes de aprehensión en contra de la Sra. María de Jesús Espinoza de los Santos y del Sr. Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, siguen abiertos hasta el día de hoy. Aunque la ejecución de las órdenes de aprehensión estaría suspendida de facto, debido al acuerdo político que se habría llegado con representantes de la Secretaria de Gobierno del estado de Chiapas, este no tendría efectos jurídicos sobre las órdenes emitida por el Juez, que también siguen abiertas.

La señora María de Jesús Espinoza de los Santos y Victor Hugo Zavaleta Ruiz promovieron un juicio de amparo en contra de las órdenes de aprehensión. En dicho juicio se realizaron dos audiencias, el 7 y 13 de marzo, respectivamente. No obstante, el Juez aún no ha resuelto sobre ninguno de los dos casos, de modo que el juicio de amparo también continua abierto y pendiente de una decisión final.

La denuncia y las órdenes de aprehensión, coincidirían con su postulación como candidatos de planillas para formar parte del liderazgo sindical de trabajadores del sector salud de Chiapas en las elecciones gremiales recientes.

Se expresa preocupación ante las acusaciones penales y las órdenes de aprehensión en contra de la Sra. Espinoza de los Santos y el Sr. Zavaleta Ruiz, así como en contra de otras personas trabajadoras del sector salud en Chiapas, algunas de las cuales ya han sido detenidas. Resulta preocupante que dichas privaciones de libertad pudiera estar motivadas por el ejercicio de la libertad de expresión, a través de la huelga de hambre, para protestar en contra de sus condiciones laborales, el desabasto de medicamentos en los hospitales de la entidad y la corrupción en las instituciones estatales de salud. Se expresa preocupación asimismo por las implicaciones que dichos procedimientos penales podrían tener en la participación efectiva de la comunidad y del personal de salud en la formulación y aplicación los programas de salud y en particular en la participación de la Sra. Espinoza de los Santos y el Sr. Zavaleta Ruiz en el proceso de elección de liderazgos sindicales del sector salud de la entidad.

En relación con las alegaciones arriba mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a nuestra atención. En este sentido, estaríamos muy agradecidos/as de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:

1. Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba.

2. Sírvese proporcionar información sobre los hechos y fundamentos legales sobre los cuales se basan las acusaciones penales por el delito de motín en contra de la Sra. Espinoza de los Santos, el Sr. Zavaleta Ruiz, y demás trabajadores hospitalarios involucrados en el caso. Sírvese asimismo explicar cómo éstas son compatibles con los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación bajo los artículos 19, 21 y 22 del PIDCP.
3. Sírvese proporcionar información sobre la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de la Sra. Espinoza de los Santos, el Sr. Zavaleta Ruiz, y demás trabajadores hospitalarios involucrados en el caso, así como sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para proporcionar todas las garantías del debido proceso a los mismos.
4. Sírvese proporcionar información sobre las bases legales y el procedimiento para la privación de libertad de los trabajadores que participaron en la huelga de hambre y sobre cómo el Estado garantiza que dichas acciones sean acordes con sus obligaciones internacionales, en particular con el artículo 9 del PIDCP.
5. Por favor indique cuáles han sido las medidas adoptadas para garantizar la legítima participación de la comunidad y el personal de salud, entre los que se encuentran la Sra. Espinoza de los Santos y el Sr. Zavaleta Ruiz, en la formulación y aplicación de los programas estatales de salud. Asimismo, por favor explique de qué manera se cumple con la obligación inmediata relativa al suministro de medicamentos esenciales.
6. Sírvese proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para garantizar la legítima participación de la Sra. Espinoza de los Santos y el Sr. Zavaleta Ruiz en los procesos internos de relevo en el liderazgo sindical del sector salud en el estado de Chiapas.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas en un plazo máximo de 60 días. Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la Sra. Espinoza de los Santos y el Sr. Zavaleta Ruiz. Quisiéramos asimismo instar a que adopte las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos.

Finalmente, quisiéramos informar que una vez transmitido una comunicación al gobierno, el Grupo de Trabajo pudiese transmitir el caso por medio de su procedimiento ordinario, a fin de emitir una opinión sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad. Dichos llamamientos de ninguna manera prejuzgan la opinión que podría emitir

el Grupo de Trabajo. El gobierno debe responder en forma separada al procedimiento de acción urgente y al procedimiento ordinario.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Elina Steinerte

Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

David Kaye

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Dainius Pūras

Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Michel Forst

Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con las alegaciones, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales relacionadas al caso.

En concreto, quisiéramos hacer referencia a los artículos 9, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al que México accedió el 23 de marzo de 1981, que establecen la prohibición de la detención arbitraria y los derechos a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión pacífica, así como a la libertad de asociación, respectivamente.

En ese sentido, quisiéramos destacar ante el Gobierno de Su Excelencia lo establecido por el Comité de Derechos Humanos al interpretar el artículo 9 del PIDCP y su relación con el artículo 19. En su Observación General No. 35 (pár. 17 y 53), el Comité estableció que la privación de libertad es arbitraria si es una consecuencia del ejercicio legítimo de derechos humanos como la libertad de expresión, reunión y asociación. Este criterio ha sido acogido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de manera constante en su jurisprudencia (A/HRC/36/38, pár. 8(b)).

Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2 que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, quisiéramos subrayar que los artículos 5 y 6 de la Declaración establecen los derechos a reunirse pacíficamente, a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos, así como expresar opiniones sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

De igual manera, quisiéramos llamar la atención de Su Gobierno al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), al cual México accedió el 23 de marzo de 1981. Dicho artículo establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva de este derecho, también impone a los Estados diversas obligaciones de efecto inmediato, entre las que se encuentra el suministro de medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS, así como la adopción y aplicación de planes de acción elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un proceso participativo y transparente (Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OG, párrafos 30 y 43).

En este sentido, un factor integrante de toda política, programa o estrategia con miras al cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en virtud del artículo 12 es

el derecho de las personas y grupos a participar en el proceso de adopción de decisiones que puedan afectar a su desarrollo. Para promover la salud, la comunidad debe participar efectivamente en la fijación de prioridades, la adopción de decisiones, la planificación y la aplicación y evaluación de las estrategias destinadas a mejorar la salud. Sólo podrá asegurarse la prestación efectiva de servicios de salud si los Estados garantizan la participación del pueblo. (OG párrafo 54).